

ESTADO DE EXCEPCION PERMANENTE, CORRUPCION, MIEDO Y VIOLENCIA PARA EL PUEBLO COLOMBIANO.

¡LA PAZ DE LOS RICOS NO ES LA PAZ DEL PUEBLO!

En los últimos 30 años en Colombia se ha desarrollado un proceso de consolidación del modelo de desarrollo forzado. Santos y Uribe, dos caras del mismo proyecto económico y político, pretenden definir el espacio político, la vida política nacional y sus debates fundamentales ubicándose a sí mismos en ambos lados de la balanza y configurando una idea en la que las fuerzas políticas alternativas, las minoritarias, las provenientes de la insurgencia y de la “izquierda democrática” son invitadas para amenizar una competitiva fiesta política en la que los ganadores ya están definidos. La implantación de un modelo político que se apuntala y consolida desde el unanimismo discursivo, la propaganda y la legalización del estado de excepción. Todo de cara a una nueva fase del modelo de acumulación por despojo en la que la explotación de la tierra, los hidrocarburos, la minería, el control de aguas y canales de riego, pasaran de ser controlados por mafiosas élites regionales a ser manejados por las multinacionales y empresas extranjeras. Las mismas que tendrán el control de bienes públicos y servicios como la salud, la educación, la telefonía, la electricidad, el acueducto etc. En esta nueva fase de desarrollo del capital en Colombia resulta necesaria la concentración del poder en el ejecutivo, la aplicación de medidas dictatoriales y el control de los territorios urbanos y rurales para garantizar sus planes.

Para nuestras castas dominantes el acuerdo de paz alcanzado con las FARC-EP y el que se encuentra en proceso con el ELN no representan la posibilidad de ampliar la participación política de los colombianos, de construir un nuevo país que no devore a sus hijos ni los abandone a su suerte. Por el contrario, para los más ricos del país, la paz es una oportunidad de ampliar sus negocios, sacándose de encima el problema de las insurgencias, manipulando a su antojo el aparato judicial, definiendo el espacio político, acomodando la estructura policial y militar y toda su legislación para apuntalar la concentración del poder, el autoritarismo y mantenerse en el control del Estado.

Para avanzar en su proyecto y en su concepción de paz, las clases dominantes ponen en marcha reformas y planes institucionales que tienen como vocación abrirle más campo a la inversión extranjera y a la extracción de recursos naturales, pero sin la “incomodidad” de la guerra y de toda expresión social que se manifieste en contra de sus intereses. El asesinato impune de decenas de líderes populares es una muestra de la idea de paz y democracia de los que detentan el poder en Colombia. La venta de activos de la nación como parte del proceso de acumulación por desposesión, se instaura como pilar fundamental de la política económica. Tal situación -ya lo tienen claro- conducirá a un amplio sector de colombianos del campo y la ciudad al desempleo y la informalidad, a la precarización de sus condiciones de vida y como ya se ve, a la organización de resistencias y oposiciones políticas reales.

La conculcación de derechos, la institucionalización de un sofisticado estado de sitio propagandizado por los grandes medios de comunicación y por toda pelambre de intelectuales al servicio de las billeteras, que con la repetición de un discurso único y unánime pretenden definir quiénes son los voceros de la civilización y la política.

Establecer la permanencia de un estado de excepción no es una fórmula nueva del actual gobierno, ya habían avanzado en constitucionalizar el estado de sitio al querer convertir la “seguridad democrática” en política de Estado. Hoy han avanzado en ese propósito por una vía más sencilla: el código de policía como legalización de la ilegalidad, el fortalecimiento de la militarización de la cotidianidad y con un poder absoluto de la policía, para blindar su concepción de paz.

LA CONTRA-REFORMA SE PONE EN MARCHA ANTES DE LA REFORMA.

Tal como lo había señalado Santos en las negociaciones con la insurgencia de las FARC, el Estado no cedería en el diseño de la política económica y social. El haber conducido a millones de colombianos a la miseria y a la ignorancia no es razón de peso para detener su modelo económico. El visto bueno por parte de la Corte Constitucional a la ley ZIDRESⁱ, la aprobación de la Reforma Tributariaⁱⁱ, los Planes Estratégicos de Interés Nacional PINES incluidos en el PNDⁱⁱⁱ e incluso las modificaciones al primer punto sobre tierras en el acuerdo del Teatro Colón, son muestras claras de la verdadera vocación de paz de las clases dominantes: profundizar el saqueo y la guerra contra los campesinos y las comunidades para apoderarse de los recursos naturales, en últimas, una pacificación donde no entra la discusión sobre el modelo económico. Sólo con observar el punto de tierras, una vez más se asoman las frustraciones de los campesinos colombianos que ven cómo Santos, sin rubor alguno, garantiza la apropiación de los baldíos por parte de los grandes empresarios del campo^{iv}, impidiendo, una vez más, la democratización de la tierra, lastre histórico y núcleo del conflicto colombiano. De nuevo la contra-reforma se pone en marcha antes de la reforma.

Para nadie es un secreto que tan pronto como las FARC comenzaron los preagrupamientos y las últimas marchas definitivas hacia los campamentos de transición, el ejército puso en marcha el “Plan de estabilización y consolidación Victoria”^v (que además de su nombre altamente simbólico) se traduce en el aseguramiento militar para la inversión extranjera tal y como se ha venido desarrollando en diferentes zonas del país con los Batallones energéticos y viales. Las poblaciones, ven cómo ahora militares, sus antiguos verdugos, buscan ser el nuevo polo de desarrollo regional cooptando liderazgos locales y estableciendo las condiciones propias para eliminar las posturas radicales y hacer menos “duros” los impactos conocidos del modelo económico. Paralelamente para limpiar el camino de los que no encajan en su proyecto e insisten en la organización contra el modelo, hacen uso de los paramilitares atacando y asesinando selectiva y sistemáticamente a la población desarmada, asegurando el control territorial en zonas que antes eran de imposible acceso para los ricos, como ha venido ocurriendo en la región del Catatumbo con el silencio cómplice del Ejército, que sobrevolando el área previamente, asegura la llegada de los paramilitares.^{vi}

Entonces no resulta extraño que en los ya olvidados convenios post plebiscito se reconociera fácilmente entre los “voceros del sí” a muchos ex funcionarios del gobierno de Uribe y entre los “voceros del no” a antiguos amigos o colaboradores de su ministerio de defensa. Acusándose mutuamente de atentar contra los intereses de los colombianos, transan y acuerdan su posición al frente de los negocios y un lugar en el postacuerdo libre de toda responsabilidad política y penal por los crímenes cometidos en convenio, despejando el camino para limpiar capitales y tierras despojadas.

La “oposición” uribista cabalga sobre la justificada indignación popular para reclamar acuerdos que

beneficien a su sector de clase. La burla es más indignante cuando muchos colombianos humildes recogidos en la huestes uribistas padecen a diario la inclemencia de un sistema de salud impuesto por Uribe y sus socios, sistema que obliga a los pobres a mendigar medicamentos y exámenes de elevados costos. El engaño, la trapisonda y el analfabetismo político para el pueblo colombiano como herramienta de dominación.

El continuo incumplimiento por parte del gobierno de todos los acuerdos con diversos sectores sociales, incluyendo camioneros, campesinos, empleados del sector público, los pobladores del Chocó y hasta la misma insurgencia^{vii}, muestra claramente que la negación de derechos por parte del gobierno santista es la regla, y que al igual que Uribe la pretensión sigue siendo acabar con el conflicto sin que cambien las condiciones que lo hicieron posible.

ESTADO DE EXCEPCIÓN PERMANENTE Y CERRAMIENTO DEL CAMPO POLÍTICO.

La doctrina de acción integral (DAI), como parte de la revolución en asuntos militares (RMA) orientada por la doctrina militar norteamericana, es parte fundamental de la consolidación del proyecto económico y político del nuevo siglo. Lo que para algunos sectores es un “cambio de época política”, “la esperanza de ampliación de la democracia”, se convierte en los hechos, en una situación en la que todos los conflictos sociales se manejan con la fuerza y la punición, donde los “falsos positivos” judiciales y militares se justifican desde un discurso oficial excluyente, tendencioso e impermeable a la razón que pretende convencernos de que “estamos en el mejor de los mundos posibles”, donde lo políticamente correcto es aceptar las órdenes y lineamientos de las autoridades, un mundo en el que los derechos humanos son solo retórica publicitaria y el terror y la barbarie de los poderosos, socialmente aceptadas, son hoy parte fundamental de la cultura, configurando el fascismo social y por esa vía estableciendo el criterio de la DAI de movilización total en el que se borra la distinción entre combatientes y civiles, luego cualquier oposición se define como anillo de respaldo de fuerzas oscuras enemigas de “la paz”

La misma población pobre y víctima del modelo económico, que padece los desplazamientos y ataques paramilitares, cuando no del ejército y la policía, para abrirle campo a represas, concesiones mineras o grandes obras de infraestructura, está expuesta a las más duras y precarias condiciones de vida, sin acueductos, puestos de salud o escuelas en donde educar a sus hijos. La población urbana pobre es desplazada para que su lugar sea ocupado por grandes proyectos urbanísticos que ordenan la ciudad en el sentido político, ideológico y económico que requieren las clases dominantes; miles de pobres de la ciudad se convierten en ciudadanos de segunda que no tienen acceso a los sistemas de transporte, a la salud, la educación, que no tienen derecho a habitar ciertos espacios de la ciudad, reservados para los “ciudadanos de bien” que pueden pagar el vivir en determinadas zonas, el disfrutarlas y transitar por ellas. La propaganda acerca de cómo se portan de mal los marginales de la ciudad, legitima y justifica la guerra contra los pobres sobre los que se extiende, en la práctica, un estado de excepción permanente que les congela las posibilidades de vivir bajo el amparo de insuficientes garantías constitucionales, arrebatándoles la ciudadanía y haciéndolos vulnerables al abuso de los poderosos.

Convertidos en “no ciudadanos”, los más humildes ven cómo en Colombia las opciones de apertura democrática y paz se deshacen ante los planes de las castas gobernantes que sustentan su guerra en la sospecha y el temor que despiertan quienes no adulen las prácticas y poses de los ricos o

simplemente quienes no sean necesarios para su expansión económica. Diferentes expresiones de la realidad nacional así lo muestran: en la hidroeléctrica del Quimbo o las minas del Cerrejón los pobladores son desplazados con autorización de la ley y por decisión de las grandes corporaciones^{viii}, estos humildes campesinos o pescadores viven el rigor de una ley privatizada que los vigila y persigue por representar un obstáculo para los negocios. Incluso el caso de la niña Yuliana Samboní^{ix} lo confirma: la acción criminal de un hijo de nuestras aristocracias en contra de una niña indefensa, pobre, desplazada, de ascendencia indígena, es un ejemplo muy dicente de cómo los ricos desprecian y están acostumbrados a hacer lo que se les da la gana con los pobres, el esfuerzo de los medios de comunicación por ocultar el nombre de Rafael Uribe Noguera, la actitud de sus familiares tan culpables y degenerados como él, que trataron de esconderlo en una clínica para sacarlo luego del país, se estrelló contra la indignación de la gente que impidió que se salieran con la suya, los lamentos de muchos altos funcionarios que se manifestaron al respecto se debieron a que uno de los suyos quedó al descubierto como violador y asesino, escoria humana.

La corrupción de las facciones en el poder campea, las acciones turbias de los especuladores financieros, banqueros y constructores colombianos salen al sol por las disputas entre ellos, pero la propaganda oficial se centra en que “el código de policía va a mejorar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos”. Como botón de muestra, miles de vendedores ambulantes son perseguidos a diario por la policía, castigados, multados y despojados de sus mercancías por huirle a la delincuencia y sobrevivir en la informalidad, y no ven cómo sea posible que su vida sea más tranquila y segura.

Así se configura **la legitimación de lo ilegítimo**: la salud sólo es posible para quien pueda pagar por ella, la reforma tributaria le mete la mano al bolsillo a la gente del común mientras los ricos gozan de grandes exenciones de tributo. **La legalización de lo ilegal**: se impone un código de policía, con sus allanamientos sin orden judicial, poderes discrecionales para la policía, control absoluto de la vida social, militarización de la cotidianidad y fortalecimiento del conservadurismo más atrasado. En últimas se afianza y asegura el poder de los ganadores de una larga y cruenta guerra que construyen para sí un espacio político en el que sólo caben los políticos profesionales que asuman los “ritos de la democracia”^x con todos sus vicios e ignominias, mientras el pueblo se hunde en la ignorancia, la pobreza, el rebusque y queda maniatado sin poder ver más allá de la lucha diaria por sobrevivir. En tanto que la izquierda parlamentaria y algunos sectores de la insurgencia se quedan sin iniciativa, ya que aceptaron las condiciones actuales del campo político en el que los que no repitan el libreto de la paz del gobierno deben ser censurados y liquidados, buscan así que nadie pueda influir más allá de lo establecido en el direccionamiento de la política nacional.

CORRUPCIÓN Y GOBIERNO ANTIDEMOCRÁTICO

Los medios de comunicación nos muestran todos los días ejemplos de lo mal que nos portamos los pobres: colados, vendedores ambulantes, champeteros etc., mientras ¡los ricos se roban con millones de dolares el futuro de los colombianos, abusan y se aprovechan todos los días de sus puestos en el Estado y la empresa privada para lucrarse y para maltratar al colombiano de a pie! ¿Y ahora resulta que son ellos los modelos aspiracionales, los patrones sociales, culturales y económicos? La cultura mafiosa es precisamente esa en la que un grupo cerrado maneja los hilos del poder para hacer crecer sus negocios legales e ilegales y sustenta ese manejo en la violencia de las fuerzas oficiales y de las redes de ilegalidad, cuando no una violencia generalizada como la guerra, entonces miles de violencias cotidianas sobre una población políticamente analfabeta cuya virtud principal es ser

aguantadora y trabajadora.

En Colombia la corrupción no es una situación anormal en el proceso político y económico; por el contrario, es un modo de manejar el Estado y de gobernar el país (el robo de REFICAR resulta en la excusa perfecta para aumentar precios de combustibles); las clases dominantes usan el poder para su beneficio en detrimento de los pobres de la nación, evidenciando el criterio con el que se reconocen a sí mismas: como una casta privilegiada con derechos de primera, sin el más mínimo sentido de solidaridad o soberanía nacional al imponer su sed de riqueza y opulencia (y la de empresas y gobiernos extranjeros) sobre la vida, el desarrollo y el bienestar colectivo.

Es tan obscena la corrupción como regla en nuestro país que las dos campañas presidenciales, con oportunidades de ganar, recibieron dinero de la multinacional constructora Odebrecht, a la que las compañías de Sarmiento Angúlo dieron aval para que un banco del Estado le prestara plata, y encima el fiscal Néstor Martínez es el encargado de investigar semejantes delitos de cuello blanco. Martínez como súper ministro de la presidencia viabilizó con su firma en el Conpes los oscuros contratos y fue empleado de los empresarios privados (NAVELENA) involucrados en las mismas contrataciones que tiene que investigar (en Colombia esto no es algo nuevo, el exfiscal Montealegre fue juez y parte en el caso de Saludcoop, hoy Cafesalud) ¡y tienen el descaro de decirnos que con el nuevo código de policía los colombianos del común tenemos que “portarnos bien”!

Ante este panorama la corrupción es un problema que va más allá de los sobornos. El hecho de que se empeñen tanto en esclarecer “a la mayor brevedad posible” quién le entregó a quién la plata, evidencia que por ahí no es la cosa y que lo que se encubre es un modo de gobernar que consiste en la concentración del poder político para garantizar que las decisiones de impacto económico y social beneficien a los de su casta: ejemplo, Otto Bula, quien se hizo elegir con la autorización de paramilitares y terratenientes regionales en el Senado de la república para garantizar que cuantiosos contratos terminaran en manos de sus amigos, a su vez ellos le retribuyen tal favor ampliando su influencia económica y política. Como él, muchos de nuestros “honorables” dirigentes llegan para hacer fluir el círculo del poder y mafia, y por ese camino se viabiliza la aprobación de leyes que entran a perjudicar claramente los intereses de los pobres, ejemplo de ello es la reforma tributaria; a pesar de quererse cubrir con un manto de legalidad, lo que se demuestra es la perpetuación de los ricos como una de las más sofisticadas organizaciones criminales y el hecho es que las podridas relaciones que se tejen entre empresarios y políticos se convierten en leyes y políticas contra los sectores más humildes y trabajadores. **Es garantía de su gobernabilidad beneficiar a sus amigos mientras el pueblo se hunde en la más grave apatía y despolitización.**

REBELDIA Y ORGANIZACION, URGENTES PARA EL PUEBLO

Nuestro premio nobel de paz se alinea con la OTAN, situándose como el líder latinoamericano más obsecuente y dócil a la política exterior estadounidense, mientras se acomoda para lo que resta de su presidencia. El nombramiento de Oscar Naranjo, delatado por sus antiguos socios del narcotráfico e investigado por impulsar grupos paramilitares en México^{xi}, como nuevo vicepresidente es una señal clara de que el paramilitarismo y la línea “dura” de las fuerzas militares seguirá apuntalando las inversiones en las regiones estratégicas, de la mano de la gestión del ministro Pardo, la nueva gobernabilidad se abre paso en el campo, y la ciudad. Las dos caras del posconflicto: la de Pardo y la de Naranjo, sintetizan la perspectiva clara de imponer un único camino para Colombia.

Ya no sólo resulta un sacrilegio contradecir el credo de la economía neoliberal. Tras la firma del acuerdo, las clases dominantes imponen un manual de buenas prácticas políticas, los “ritos y caminos institucionales” como única vía para la expresión y la concreción de la acción política se asemejan al dogma de la economía de mercado, como el modo civilizado, sabio y “responsable” del ejercicio político. Por más que repitan la idea de un nuevo modelo de país democrático en el que la violencia como medio para conseguir objetivos políticos está proscrita y el ejercicio de la oposición es respetado, se configura un modelo antidemocrático en el que a las diversas expresiones políticas que no adopten los ritos, los discursos, los programas económicos y políticos, el modo de gobernar y negociar de las clases dominantes, se les impone la violencia y el exterminio.

Concentrando el discurso y las maneras “legítimas” del ejercicio de la política, el establecimiento se convierte en un cuerpo auto inmune que incorpora el “veneno” para salir fortalecido. Asimismo la oposición política se restringe a contradecir un conjunto de ideas “autorizadas” que no tienen la posibilidad de desestabilizar la estructura de poder ni los caminos para la toma de decisiones, por eso la imperiosa necesidad de impedir que las mayorías accedan al poder político y al dominio de la cosa pública, por eso es necesario para ellos construir un espacio político donde la marginación y las restricciones sociales y políticas sobre amplios sectores de la población sean la norma, por eso se instituye la idea de unos ciudadanos (que pueden habitar el centro, los espacios amables, sacar su carro cuando quieran en tanto puedan pagar) y otros considerados inferiores que no tienen derecho a los bienes sociales básicos ni a participar en las decisiones políticas que les afectan. En este contexto de crisis social se desarrolla una guerra contra los trabajadores, contra los pobres; a las grandes mayorías de colombianos nos queda sólo el miedo, la violencia preventiva y el rebusque para una precaria subsistencia.

Es clara la pretensión de las clases dominantes de eliminar cualquier forma de expresión política que obstaculice sus planes de negocios y su modelo de gobierno mafioso. Confundiendo al pueblo por medio de una falsa oposición entre el uribismo y el santismo, para que por medio de una nueva carambola política, se posicione a Vargas Lleras como el próximo presidente; otra “tercera vía” que recogerá un poquito de cada uno “sin polarizaciones” y en el punto exacto para que nuevas fuerzas políticas puedan seguir “acumulando fuerzas” mientras maduran las condiciones para la “bienaventuranza” política de ampliación de la democracia.

Ninguno significa una alternativa real para que las condiciones padecidas por el pueblo colombiano se acaben, puesto que defienden e impulsan la economía extractiva, la privatización de los bienes comunes, el autoritarismo, la gobernabilidad negociada y todos los mandamientos de la liturgia neoliberal. Coinciden en la necesidad de eliminar la oposición política y contener a la “pobrecía” en el campo y la ciudad, “los buenos” aceptan sin remilgo los programas impulsados por el gobierno y el código de policía, “los malos” son asesinados, encarcelados o desplazados a la fuerza para garantizar la inversión y la explotación de recursos estratégicos en el campo, son apaleados y multados por hacer uso del espacio público para sobrevivir en las ciudades.

Los colombianos que somos víctimas diarias de los que mal gobiernan, del desangre de los impuestos, que sufrimos la persecución del código policía y de sus aparatajes para-institucionales, de sus leyes que empeñan nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra educación, nuestros recursos naturales y nuestra identidad, de sus normas que nos arrojan a la degradación social, al atraso moral y cultural,

no podemos esperar de ellos la solución a nuestros problemas, ni aceptar sumisamente que tengan el monopolio de las decisiones políticas. Es momento de romper con el mito de que los realmente afectados somos los responsables directos de todos los males de nuestra nación: la rebeldía y el sabotaje a las pretensiones de quienes nos desprecian, son hoy tan necesarias como la lucha, la movilización y la organización, son nuestra alternativa para ejercer el poder, luchar por la paz y la democracia, construir un país justo, para el pueblo, que sea soberano, independiente y que garantice a la mayoría de sus hijos una vida digna y sin miseria.



M.R.P.
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

-
- i <http://www.elespectador.com/noticias/politica/asi-quedo-ley-de-zidres-articulo-606601>
- ii <http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/9843-la-nueva-frustraci%C3%B3n-tributaria.html>
- iii
- iv <http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/un-nuevo-acuerdo-y-unos-nuevos-desacuerdos-modelo-zidres-en-el-punto-1>
<http://justiciatributaria.co/blog/2016/01/14/el-espectador-isagen-y-zidres-mentis-a-la-paz-cristina-de-la-torre/>
- v <http://www.cgfm.mil.co/2017/02/21/plan-militar-victoria-una-paz-estable-duradera/> <http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/fuerzas-militares-priorizaran-seguridad-en-160-municipios-tras-salida-de-las-farc.html> <http://www.congresovisible.org/agora/post/plan-nacional-de-desalojo-la-figura-de-utilidad-publica-y-el-sector-de-infraestructura-como-medios-para-el-despojo/7125/es>
- vi <http://www.rcnradio.com/noticias/ejercito-ocupado-espacios-las-farc-dejado-catatumbo-desvirtuan-presencia-paramilitares-la-gabarra/>
- vii <http://www.las2orillas.co/los-incumplimientos-del-gobierno-a-la-implementacion-del-acuerdo-final-con-las-farc-ep/>
<http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/sindicato-del-inpec-advierte-que-entrara-a-paro-por-incumplimientos-del-gobierno/20170116/nota/3357178.aspx> http://caracol.com.co/emisora/2017/02/12/medellin/1486918381_298322.html
<http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=Campesinos-protestan-por-%E2%80%98incumplimientos%E2%80%99-del-Gobierno&WPLACA=73387>
- viii <http://www.diariodelhuila.com/el-quimbo/las-tristezas-que-deja-el-quimbo-cdgint20150421074952158>
<http://www.quimbo.com.co/2013/09/campesinos-de-la-jagua-afectados-por-el.html> <http://www.las2orillas.co/familias-fueron-desplazadas-la-guajira-beneficiar-la-mineria-del-cerrejon/>
- IX <http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/9924-privilegiados-y-vulnerables-la-estructura-social-detr%C3%A1s-de-la-muerte-de-yuliana-sambon%C3%AD.html>
- X <http://www.elespectador.com/noticias/paz/necesario-borrar-idea-de-hay-una-violencia-buena-humber-articulo-677041>
- xi <http://www.proceso.com.mx/431373/la-dea-implica-a-exasesor-de-pena-nieto-con-el-narcotrafico>
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/09/120920_mexico_general_naranja_controversia_jcps